CENTRO DEMOCRACIA Y COMUNIDAD

N°3
Junio 2015

REFLEXIÓN Y DEBATE

Apuntes para la Discusión: Agenda Pro Confianza

Sergio Espejo Yaksic
Diputado de la República

Apuntes para la Discusión: Agenda Pro Confianza. Sergio Espejo Yaksic[1].

Resumen

La crisis de confianza que golpea a las instituciones y el liderazgo público y privado en Chile es de gran envergadura. No existen soluciones simples ni de corto plazo. El cambio de gabinete reconoce tanto el impacto de esta crisis en la conducción política y económica del gobierno, como la responsabilidad de éstos en el origen de la crisis. Para recuperar la iniciativa política es necesario implementar a la brevedad las conclusiones de la Comisión Engel y la Agenda de Probidad,así como resituar el crecimiento económico como una tarea central del gobierno, evitando la tentación de intentar recuperar legitimidad política a través de medidas populistas. Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno debe reconocer que el tiempo para implementar políticas significativas se acaba, lo que exige definir y transparentar la agenda que organizará su trabajo hasta el fin del mandato presidencial. Ello es particularmente cierto respecto del sector salud y el sector educación, cuyos desafíos prácticamente se confunden con los compromisos programáticos y que, por razones que se indican, enfrentan severas dificultades. Por la magnitud del impacto social en ambas áreas, así como su identificación con la identidad del gobierno y la Presidenta, corregir las deficiencias políticas y de gestión y transparentar un plan de acción viable para lo que resta del mandato presidencial en salud y educación es fundamental. Recuperar la confianza de la ciudadanía exige reconocer lo que se ha hecho mal, explicitar lo que efectivamente haremos y proponer un horizonte creíble de acción hacia el futuro.

Apuntes para la discusión

La crisis que golpea a nuestra sociedad es de tal magnitud e imprevisibilidad, que resulta difícil definir cartas de navegación precisas. Con todo, la expresión más reiterada para describir este fenómeno es la de "crisis de confianza". Sus efectos se extienden sobre la mayoría de las instituciones públicas y privadas, sobre liderazgos políticos, sociales e incluso religiosos. Sin pretender adentrarnos en explicaciones de tipo estructural, es evidente que – en particular - la ciudadanía ha roto el vínculo que la unía con sus representantes políticos, instalándose un cuestionamiento de amplio espectro no sólo sobre la probidad de los primeros, sino también sobre la competencia de éstos y la capacidad de nuestra democracia para canalizar demandas sociales, procesar intereses en conflicto y definir cursos de acción eficaces para crear bienestar.

---

1 Diputado de la República por el Distrito N°35, Región de O'Higgins. Abogado y Magíster en Políticas Públicas. Correo: sergio.espejo@congreso.cl. Twitter: @sergioespejo. Vice-Presidente del Partido Demócrata Cristiano.

Limitada en su capacidad de acción por la fuerza de la crisis, a la vez que también responsable de ella, la conducción política y económica fue renovada a través de un cambio de gabinete que pretende recuperar la iniciativa política y la capacidad de gobernar. En particular, parecía indispensable dejar atrás un tipo de conducción política con baja disposición al diálogo y que, a la hora de construir los equipos de gobierno a lo largo del país y estructurar su trabajo, pareció privilegiar, o al menos permitir, la instalación de una lógica de parcelas de poder por sobre el establecimiento de un espíritu de coalición. El agotamiento de esta primera etapa también se expresó en una conducción económica que resultó incapaz de compatibilizar las reformas comprometidas con un ambiente proclive al crecimiento económico, sin el cual es imposible crear empleos, sostener inversión social y expandir el bienestar.

Nunca ha sido fácil gobernar. Menos aún lo es gobernar bien. Sin embargo, no es habitual enfrentar simultáneamente desafíos del nivel de complejidad que tenemos por delante. La recuperación de la iniciativa política exige actuar sobre la coyuntura, garantizando transparencia en las investigaciones sobre financiamiento de la política, legislando con rigurosidad y serenidad en materia de probidad, encauzando demandas sociales y sectoriales que parecen encontrar sólo en la movilización una alternativa de solución. Del mismo modo, debemos instalar sin ambigüedades el crecimiento económico como una tarea fundamental del gobierno. Sin una economía dinámica, abierta al emprendimiento y la innovación, no es posible crear empleos ni dotar a éstos de calidad y sustentabilidad en el tiempo.

Para hacer frente a estos desafíos será necesario estar especialmente atentos a dos elementos. Primero, la necesidad – más allá de la evolución de las investigaciones judiciales – de un gesto político mayor de reconocimiento de las irregularidades en el financiamiento de la actividad política, unido a las sanciones que resulten de ello y a la definición de un compromiso estratégico con la implementación de las reformas propuestas por la Comisión Engel y la Agenda de Probidad. Segundo, la importancia de resistir la tentación populista, aquella que mueve a asimilar el liderazgo político con las demandas sociales y sectoriales, en un esfuerzo de corto plazo por recuperar la legitimidad pérdida, sin consideración al impacto sobre el bien común o a la precariedad de las medidas que se proponen.

Sin perjuicio de lo señalado, es precisamente en el ámbito de la política social donde el gobierno posee mayor espacio para exhibir resultados que lo reconcilien en el mediano plazo con la ciudadanía. Es también allí donde el riesgo de fracaso es mayor. Particularmente en áreas como la salud, ubicada consistentemente en las encuestas como una prioridad ciudadana, y la educación, demanda social comprometida irremediablemente con la promesa de cambio que condujo a la Nueva Mayoría al gobierno. En términos simples: el gobierno hizo de la educación y la salud dos piezas fundamentales de su lucha contra la desigualdad. De instalarse la percepción de que en

ambos campos los avances son mediocres o inexistentes, el castigo ciudadano será inevitable y contundente.

Los próximos meses serán críticos para determinar los avances que se podrán exhibir al término del período presidencial. El tiempo que media entre hoy y el término del mandato, así como la distancia respecto de los próximos procesos electorales, hacen del segundo semestre de 2015 el último espacio disponible para definir prioridades estructurales y conservar alguna oportunidad de concretarlas.

En materia de salud, ha sido la propia Presidenta quien se ha visto forzada a reconocer públicamente que no será posible cumplir con el compromiso planteado en el programa de gobierno en materia de construcción de hospitales. Esta cuestión, compleja como es, se ha visto agravada por la información que indica que además enfrentamos un incremento de la deuda hospitalaria hasta alcanzar una cifra superior a los $150 mil millones de pesos, más de un 60% superior a la existente al inicio del gobierno. Peor aún, la información entregada a la opinión pública mostraría un incremento en las listas de espera para atención de salud vía AUGE que alcanzan casi 13 mil personas y un incremento en torno al 60% durante este año.

Las explicaciones técnicas que se puedan entregar para justificar estas cifras no pueden esconder la pérdida de tiempo producida por una lucha teórica y carente de sentido práctico a propósito del modelo de concesiones hospitalarias. Sus opositores, no carentes de argumentos, resultaron incapaces sin embargo de articular una alternativa efectiva que hiciera posible avanzar en la construcción de hospitales según lo comprometido. El resultado es evidente: No están los hospitales ni sabemos de verdad qué es lo que seremos capaces de construir en este período. Sumemos la deuda hospitalaria y el incremento en listas de espera y debemos concluir forzosamente el agotamiento de los equipos y el modelo de gestión responsable.

La nueva gestión en el Ministerio de Salud debe constituir una oportunidad para llevar a cabo los cambios necesarios. Lo razonable es exigir un programa de acción viable, con metas y plazos realistas, con responsables competentes y bien definidos. Si el Ministerio de Salud no sabe construir, que no lo haga. Deje esa tarea a quienes saben hacerlo. Si quienes en el ministerio o en los servicios dependientes están a cargo de enfrentar el déficit hospitalario o la gestión de la listas de espera no son capaces de hacerlo, entonces es mejor cambiar hoy esos equipos.

En el campo de la educación las dificultades también se hacen evidentes. La primera de ellas tiene que ver con una cuestión inevitable. Transformar la educación en un derecho social es mucho más que declarar su acceso universal y gratuito. Es un verdadero momento constituyente en el que junto con la declaración de derechos surge también la necesidad de establecer responsabilidades y asignar roles, definir la

contribución que cada ciudadano realizará para que el ejercicio de ese derecho sea posible. Tomará tiempo el que ello sea aquilatado en toda su profundidad.

Sin embargo, lo que no resulta igualmente razonable es la incapacidad del Ministerio para entregar información comprensible para la ciudadanía sobre los beneficios de las reformas, así como proponer calendarios claros para la implementación de los proyectos más relevantes. Así por ejemplo, podemos entender que el impacto de poner término al lucro y la selección no sea fácilmente apreciable. Sin embargo, la ambigüedad o incluso confusión respecto de las metas y plazos en que se irá implementando la gratuidad tanto en la educación escolar como en la educación superior no es aceptable. Lo mismo ocurre respecto a la creación, por primera vez en casi 70 años, de dos universidades públicas (O´Higgins y Aysén). En este caso, no conocemos todavía de la existencia de equipos técnicos trabajando tanto en la búsqueda de los rectores de ambas instituciones, como preparando un programa de trabajo robusto para asegurar su implementación exitosa.

Ha ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea una nueva Carrera Docente. Pese a que se trata de un proyecto cuyos objetivos han sido perseguidos desde hace mucho tiempo por los profesores, el reconocimiento de la dignidad docente y la mejora en sus condiciones laborales, la reacción que han expresado a lo largo de Chile ha sido mayoritariamente contraria a éste. Más allá de las controversias inevitables entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, es evidente que esta discusión nos enfrenta a un escenario en el cual la falta de información sobre lo que se propone, la ausencia de una elaboración de mayor detalle, las dudas sobre la cobertura y financiamiento de las políticas planteadas, se encuentran nuevamente sobre la mesa.

Se trata, con todo, de una cuestión que debe ser abordada tanto en su dimensión técnica, como en su dimensión política. Las autoridades de Educación deben entender que las expectativas ciudadanas no están construidas sobre marcos conceptuales o debates abstractos. La "iluminación" de dirigentes sociales y políticos no es suficiente para diseñar y avanzar reformas complejas. Proponer gratuidad, crear universidades, plantear un cambio estructural en el trato a los docentes, sin acompañar aquello de metas y plazos realistas, financiamiento y transparencia en la información es una irresponsabilidad que genera expectativas que sólo pueden traducirse en frustración e indignación. El Ministerio de Educación debe señalar qué tareas enfrentará en el tiempo que nos queda en el gobierno y cómo las va a llevar a cabo. Debe asegurar además los recursos para que ello sea posible. Dice el refrán popular que el que mucho abarca poco aprieta. Podemos anticipar los resultados de no corregir a tiempo.

En definitiva, llegó la hora de asumir que los tiempos son limitados, que los recursos también lo son, que los ciudadanos rechazan tanto las promesas que no se

pueden cumplir como aquellas que por su ambigüedad son igualmente sinónimo de falta de sinceridad. Lo que es válido en Salud y Educación lo es también respecto de las otras áreas de trabajo del gobierno.

Asegurar que la promesa de cambio que representó para Chile la elección de Michelle Bachelet y reconciliar nuestra mayoría política con las mayorías ciudadanas, exige declarar con la mayor honestidad posible qué haremos, cómo lo haremos y en qué plazos. Requiere, por cierto, explicitar que no es posible transitar en todos los ámbitos y al mismo tiempo desde un enfoque de focalización a uno de derechos sociales universales. Los recursos son escasos (presupuesto, tiempo y capital político) y deben ser destinados a las tareas más importantes, reconociendo que no es posible satisfacer hoy todas las necesidades.

El pueblo de Chile entenderá la firmeza de nuestro compromiso si nuestras intenciones son acompañadas de honestidad y seriedad en el trabajo. Podemos ser perdonados por demorarnos más de lo que esperábamos en llevar adelante las profundas reformas en que estamos involucrados. No seremos perdonados si por falta de coraje, arrogancia o incompetencia, insistimos en que es posible hacerlo todo de una vez y, como es natural, quedamos en el mismo lugar en el que nos encontrábamos al partir.

Dar forma y consistencia a una agenda de gobierno honesta y viable puede ser la fórmula más adecuada para avanzar, también, en la necesaria recuperación de las confianzas de nuestros ciudadanos. Esa que hoy todos los sectores debemos ocuparnos de restablecer, como el primero y más urgente de los desafíos a superar.

Centro Democracia y Comunidad
Av. Providencia 1017, piso 8, Providencia
Tel. (56 2) 223 50 955

contacto@cdc.cl
www.cdc.cl
Twitter: cdc_cl

Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la posición del Centro Democracia y Comunidad.

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de Reflexión y Debate citando debidamente la fuente.